



Medellín, veinte (20) de junio de dos mil veintitrés (2023)

EJECUTANTE:	Gallego y Abogados Asociados SAS
EJECUTADA:	Promotora Panorámica SAS
TIPO DE PROCESO	Ordinario Laboral
DECISIÓN:	Inadmite recurso
RADICADO Y LINK:	050013105-007-2019-00613-01 <a href="#">(111) 05001310500720190061301</a>

I. ANTECEDENTES

En el presente asunto, la sociedad Gallego y Abogados Asociados S.A.S promovió demanda ejecutiva laboral en contra de Promotora Panorámica S.A.S, pretendiendo el pago de honorarios profesionales por valor de \$50.000.000 producto de los servicios prestados a aquella compañía en el período comprendido entre junio de 2015 y abril de 2017.

Al momento de su interposición, dirigió la demanda a los jueces civiles municipales de Medellín, correspondiéndole por reparto al Juzgado Décimo Civil Municipal de Oralidad, despacho que declaró la falta de competencia para conocer del asunto remitiéndola al funcionario correspondiente, en atención a ello, la actuación se repartió al Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, ésta última autoridad avocó el conocimiento en el auto del 29 de octubre de 2019 (folio 50 ibídem), e inadmitió ordenando la devolución por falta de los requisitos, pero una vez subsanado el defecto, libró mandamiento de pago el 10 de febrero de 2020 (folios 52 a 54 ibídem).

La parte ejecutada compareció al proceso se notificó el 15 de septiembre de 2022 e interpuso recurso de reposición contra la providencia que profirió mandamiento de pago (archivo 16 Recurso de reposición), el juzgado en auto de noviembre 3 de 2022 no repuso la providencia acusada, y al no haberse propuesto excepciones, ordenó seguir adelante la ejecución (archivo 22 2019-00613 ORDINARIO-Allega documentos, no repone). Contra esta decisión el apoderado de la ejecutada

presentó el recurso de apelación cuya procedencia es objeto de análisis en esta oportunidad (archivo 24 Recurso de apelación 15nov22).

Una vez recibido el proceso, la Sala procedió a realizar el control de legalidad del artículo 132 del CGP, aplicable por analogía del art. 145 del CPT, sin que se aprecie causal de nulidad que invalide la actuación, por consiguiente, resolverá acerca de la procedencia o no del recurso de alzada interpuesto por la demandada, previas las siguientes:

## **II. CONSIDERACIONES**

El proceso ejecutivo se inicia con la orden de pago que profiere la autoridad judicial, que puede ser controvertida o no por el ejecutado. Si el demandado se opone a la ejecución, lo hará ya sea con la interposición del recurso de reposición para alegar la falta de requisitos formales del título o la falta de ciertos requisitos de la demanda o por la existencia de excepciones previas y/o con la presentación de las excepciones de fondo. Así, y dependiendo de que exista o no un cuestionamiento formal o de fondo respecto del título ejecutivo, se abrirá camino a dictar la orden de seguir adelante con la ejecución.

El estatuto procesal del trabajo y la seguridad social consagra en el capítulo XIII las diversas clases de recursos propios del procedimiento laboral, y en el artículo 63 en cuanto a las reglas de interposición y oportunidad del recurso de reposición señala: *«El recurso de reposición procederá contra los autos interlocutorios, se interpondrá dentro de los dos días siguientes a su notificación cuando se hiciere por estados y se decidirá a más tardar tres días después».*

Haciendo uso de este medio de impugnación fue que la ejecutada PROMOTORA PANORÁMICA S.A.S, controvirtió la decisión del juzgado de primera instancia que profirió mandamiento de pago en su contra, aduciendo que la especialidad laboral no es la competente para resolver la presente controversia en razón a que el demandante es una persona jurídica y como consecuencia de ello, la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral no puede conocer del conflicto jurídico originado en el reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones por servicios personales de carácter privado, conforme lo establece el numeral 6º del artículo 2º de la Ley 712 de 2001, ante el hecho de que *«el demandante debe ser una persona natural y no una persona jurídica, ante la imposibilidad de que ésta - la persona jurídica- pueda prestar un servicio personal».*

En el auto ahora cuestionado, el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín indicó que el asunto de la competencia estuvo definido en precedencia pues el Juzgado Décimo Civil Municipal de Oralidad lo remitió a ese despacho, decisión que guarda plena correspondencia con la proferida por la Corte Suprema Constitucional(sic) en el auto No 395 del 22 de julio de 2021 en el que resolvió un conflicto de competencia entre el Juzgado Segundo Civil Municipal de Neiva y el Juzgado Tercero laboral del Circuito de Neiva, asignándole la competencia a este último. Además, dijo:

**Por su parte**, no es de recibo para este despacho, el argumento de que el título ejecutivo base de la presente ejecución, no cumple con las exigencias del artículo 422 del código general del proceso, por cuanto en el mandamiento de pago recurrido claramente se explica que el contrato suscrito entre las partes cumple con **los requisitos ya que la obligación es expresa, clara y actualmente exigible**.

En este sentido, se le recuerda al apoderado de la parte ejecutada, que este último argumento expuesto en su recurso, debió ser incoado como **excepción previa** frente a la ejecución de conformidad **al artículo 442 del código general del proceso**, ya que atacó la validez y los presupuestos procesales de la actuación.

En consecuencia, se reitera no se repone la decisión atacada por la parte ejecutada.

**Cuarto:** Teniendo en cuenta que el ejecutado fue notificada en debida forma el pasado 15 de septiembre del año en curso, **sin que a la fecha hubiese propuesto excepciones o acreditado el pago dentro del término legal conferido**, por lo anterior, **se ordena continuar la ejecución y se requiere a las partes para que procedan a presentar la liquidación del crédito actualizada de conformidad al artículo 446 numeral segundo del C.G.P.**

Desde ya debe decirse que la providencia cuestionada, al resolver el recurso de reposición, no es susceptible de una nueva impugnación, tal como lo dispone el inciso 4º del artículo 318 del CGP, aplicable al procedimiento laboral por remisión analógica- artículo 145 del CPTSS-, *«El auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podrán interponerse los recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos. (...)*

Ahora, es cierto que el auto del tres (3) de noviembre de 2022, notificado por inserción en estado del 9 del mismo mes y año, una vez se abstuvo de acoger las razones de la reposición, dispuso seguir adelante la ejecución por cuanto *«el incumplimiento de los requisitos del título ejecutivo debió incoarse como excepción previa, lo que no hizo el recurrente»*, y esta última resolución constituye un punto nuevo susceptible de los recursos de ley; sin embargo, a la ejecutada no le está dado insistir, como pretende hacerlo a través del recurso de apelación, en los reparos que formuló en sede de reposición, referentes a la falta de competencia y a que el título ejecutivo no cumple con las exigencias del artículo 422 del CGP, pues ese actuar desconoce la norma citada en el párrafo anterior.

Situados en este punto recordemos que, la orden de seguir adelante significa que el juez encuentra que el título ejecutivo se ajusta por completo a la legalidad y que, por tanto, el deudor debe proceder a honrar la obligación insatisfecha. En esta etapa, queda agotada la defensa del ejecutado restando por resolver únicamente la satisfacción definitiva y completa del crédito cobrado judicialmente.

Decimos esto porque así se desprende de la interpretación del artículo 440 del CGP, aplicable al procedimiento laboral por virtud del artículo 145 del CPTSS, que en el inciso 2º regula el cumplimiento de la obligación en la siguiente forma:

**Si el ejecutado no propone excepciones oportunamente, el juez ordenará, por medio de auto que no admite recurso, el remate y el avalúo de los bienes embargados y de los que posteriormente se embarguen, si fuere el caso, o seguir adelante la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el mandamiento ejecutivo, practicar la liquidación del crédito y condenar en costas al ejecutado** (énfasis fuera del texto original).

En ese orden de ideas, como la entidad ejecutada no formuló excepciones y el juzgado ordenó seguir adelante con la ejecución, esta última providencia no admite recurso alguno.

Los autos que son susceptibles del recurso de apelación vienen expresamente enunciados en la normativa aplicable a esta Jurisdicción en el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, dicha norma enlista de manera taxativa los autos proferidos en primera instancia susceptibles de alzada sin que en ellos esté incluido el que resuelva la reposición contra el auto de mandamiento de pago y sí lo está «*el que resuelva las excepciones en el proceso ejecutivo*» como se sigue de su literalidad:

Son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia:

1. El que rechace la demanda o su reforma y el que las dé por no contestada.
2. El que rechace la representación de una de las partes o la intervención de terceros.
3. El que decida sobre excepciones previas
4. El que niegue el decreto o la práctica de una prueba.
5. El que deniegue el trámite de un incidente o el que lo decida.
6. El que decida sobre nulidades procesales.
7. El que decida sobre medidas cautelares.
8. El que decida sobre el mandamiento de pago.
9. El que resuelva las excepciones en el proceso ejecutivo.
10. El que resuelva sobre la liquidación del crédito en el proceso ejecutivo.
11. El que resuelva la objeción a la liquidación de las costas respecto de las agencias en derecho.

12. Los demás que señale la ley.

La Corte Constitucional en sentencia C-1193-05 precisó sobre la improcedencia del recurso de apelación para controvertir el mandamiento de pago en el proceso ejecutivo, los recursos que procedente contra dicho proveído y la forma en que se deben alegar las excepciones, expresó:

La decisión del legislador de establecer la posibilidad de impugnar el mandamiento de pago solamente mediante el recurso de reposición, es decir, suprimiendo respecto de esa providencia el recurso de apelación que antes existía, ha de entenderse como una decisión de política legislativa dentro del propósito de descongestionar la administración de justicia, pues es evidente que de esa manera el proceso de ejecución en su fase inicial que comienza justamente con la intimación al deudor para el pago de la obligación, no llegará al juzgador de segunda instancia, con lo cual no sólo se aplica el principio de la celeridad, sino también se permite la agilización de otros procesos al suprimir un trámite no indispensable. Se observa por la Corte, adicionalmente, que al demandado en el proceso ejecutivo no se le desconoce ni disminuye el derecho de defensa, por la circunstancia de haber previsto el legislador que los hechos constitutivos de excepciones previas solo puedan ser alegados mediante la interposición del recurso de reposición. En definitiva, lo que esto significa, es que ellas no serán tramitadas como un incidente de previo y especial pronunciamiento, en el que, además, la providencia que lo resolvía era susceptible de impugnación con el recurso de apelación. De esta suerte, si los hechos constitutivos de excepciones previas de todas maneras pueden ser alegados, resulta evidente que no le asiste la razón a la actora sobre la supuesta violación del derecho de defensa como sucedería si se le impidiera por completo su alegación. Finalmente, en relación con la posible vulneración del derecho a la igualdad, planteada por la ciudadana demandante al considerar que la posición del demandado en un proceso ejecutivo, frente a la posición de éste en un proceso ordinario, es menos ventajosa, la Sala considera que estas actuaciones no pueden ser comparadas, pues no sólo la naturaleza de las dos especies de procesos es diferente, como quiera que en un proceso de conocimiento se busca la certeza del derecho incierto en tanto que el ejecutivo se persigue la realización coactiva de un derecho cierto al menos en apariencia, pero insatisfecho, sino que, además, precisamente por esa diferencia no puede aducirse quebranto alguno a la igualdad por establecer regulaciones distintas, como lo pretende la actora.

Así las cosas, como en la providencia recurrida se discutieron los requisitos formales del título, a su vez estos no pueden declararse en el auto que ordena seguir adelante la ejecución, pues así lo establece el artículo 430 del CGP, aplicable por analogía toda vez que la normatividad procesal del trabajo no regula la procedencia del recurso de reposición en el proceso especial ejecutivo:

ARTÍCULO 430. MANDAMIENTO EJECUTIVO. Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al

demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal.

Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso. (...)”

Ahora aun cuando el artículo 442 ibídem contemple la posibilidad de atacar por vía de reposición el mandamiento de pago, el artículo 438 señala los recursos que proceden contra dicho auto lo siguiente:

El mandamiento ejecutivo no es apelable; el auto que lo niegue total o parcialmente y el que por vía de reposición lo revoque, lo será en el suspensivo. Los recursos de reposición contra el mandamiento ejecutivo se tramitarán y resolverán conjuntamente cuando haya sido notificado a todos los ejecutados.”

En el caso bajo estudio el auto reprochado calendado noviembre 3 de 2022 no es susceptible de apelación, como quiera que no está enlistado dentro de aquellas providencias que son objeto de alzada, y no existe otra disposición en la que el legislador haya dado viabilidad al recurso de apelación contra la providencia que resuelve un recurso de reposición por falta de los requisitos formales del mandamiento de pago y ordena seguir adelante la ejecución.

En consecuencia, lo pertinente es declarar inadmisibile el recurso de apelación formulado contra el auto de 3 de noviembre de 2022, mediante el cual el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín declaró la ausencia de requisitos formales del auto de mandamiento de pago y ordenó seguir adelante la ejecución y disponer la remisión del expediente al juzgado de origen para lo de su competencia.

Sin costas procesales en esta instancia.

En mérito de lo expuesto,

### III. RESUELVE:


**PRIMERO:** Declarar inadmisibile el recurso de apelación interpuesto por la ejecutada sociedad PROMOTORA PANORÁMICA S.A.S. contra la decisión proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, el 3 de noviembre

de 2022, dentro del proceso ejecutivo laboral promovido en su contra por la SOCIEDAD GALLEGO Y ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S., de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

**SEGUNDO:** Sin costas procesales en esta instancia.

**TERCERO:** Disponer la devolución del expediente al juzgado de origen, para lo de su competencia.

**NOTIFÍQUESE**



**CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO**  
**Magistrada**

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL  
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -  
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por  
Estados No. 105 del 21 de junio de 2023.

**consultable aquí:**

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>